



Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
ISSN: 0188-9834
noesis@uacj.mx
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
México

Avances recientes hacia una gobernanza fiscal abierta en América Latina

Hudson, Alan; Florez, Jorge

Avances recientes hacia una gobernanza fiscal abierta en América Latina

Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 28, núm. 56, 2019

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85954253001>

DOI: <https://doi.org/10.20983/noesis.2019.2.2>

Multidisciplinario de Ciencias sociales.

Avances recientes hacia una gobernanza fiscal abierta en América Latina

Recent progress towards open fiscal governance in Latin America

Alan Hudson [1] alan.hudson@globalintegrity.org
Global Integrity, Gales

Jorge Florez [2] jorge.florez@globalintegrity.org
Global Integrity, Colombia

Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 28, núm. 56, 2019

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

Recepción: 16 Agosto 2017
Aprobación: 02 Octubre 2017

DOI: <https://doi.org/10.20983/noesis.2019.2.2>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85954253001>

Resumen: El propósito del artículo es establecer un análisis del avance que presenta la gobernanza fiscal abierta en América Latina. A partir del estudio de los compromisos vinculados con el uso de los recursos públicos, las acciones inscritas en planes implementados por los países de la región en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), se concluye con la necesidad de aprovechar el conocimiento y aprendizaje generado en los procesos de gobernanza fiscal con el uso de los recursos públicos, para movilizar una agenda enfocada en la resolución de los principales problemas que afectan a los ciudadanos y obstaculizan lograr resultados de desarrollo.

Palabras clave: Gobernanza fiscal, gobierno abierto, transparencia y plan de acción.

Abstract: The purpose of the article is to establish an analysis of the progress made by open fiscal governance in Latin America. Based on the study of commitments related to the use of public resources, the actions included in plans implemented by the countries of the region within the framework of the Open Government Partnership (OGP), concludes with the need to take advantage of the Knowledge and learning generated in the processes of fiscal governance with the use of public resources, to mobilize an agenda focused on solving the main problems that affect citizens and impede the achievement of development results.

Keywords: Fiscal governance, open government, transparency and action plan.

Introducción

La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, son pilares fundamentales para avanzar hacia una gobernanza abierta. Los recursos públicos son el motor fundamental del desarrollo de las sociedades y un elemento clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, muchas veces el uso de estos recursos no es el más adecuado y su potencial transformador se ve reducido debido a problemas como el despilfarro, el fraude y la corrupción. Si los ciudadanos no pueden utilizar información sobre el flujo de los recursos públicos y conocer cómo serán utilizados, o bien, se desconoce los recursos públicos favorecen la co-creación de soluciones a los desafíos que enfrentan las sociedades, y como se asegura que tales soluciones serán implementadas, difícilmente se puede hablar de gobierno abierto.

La persistencia de opacidad sobre el uso de los recursos públicos y los altos niveles de percepción de corrupción, vienen afectando negativamente la credibilidad y la confianza que los ciudadanos depositan en los gobiernos. América Latina continúa siendo escenario de importantes tensiones entre los ciudadanos y los gobiernos (Latinobarómetro 2015). Prevalcen grandes escándalos de corrupción como los ocurridos en torno a Petrobras en Brasil o los diversos ejemplos de redes de corrupción que se hicieron evidentes con la publicación de los “Panamá Papers”. Más que esporádicas, las situaciones de abuso del poder y la fuerza pública para amedrentar a ciudadanos y periodistas, aseguran alto niveles de impunidad, que ocasionan situaciones preocupantes, como los desaparecidos en México (Human Rights Watch 2013) o amenazas para frenar la libertad de expresión en varios países de la región (Freedom House 2016).

Importantes expresiones de hastío se observan ante la corrupción, exigiendo la aplicación de sanciones a los responsables, como se ha visto en Guatemala y Brasil, o la reforma de las instituciones para fortalecer la lucha contra este flagelo, como se evidenció en México con la iniciativa ciudadana 3 de 3 (Pardinas 2016).

En las últimas décadas, muchos países han venido trabajando por mejorar la transparencia sobre el uso de los recursos públicos, involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones en el tema y fortalecer la rendición de cuentas como herramienta para luchar contra la corrupción y asegurar un uso eficiente de estos recursos (Petrie y Guerrero 2015). América Latina no ha sido la excepción. En la región se han promovido reformas institucionales importantes como: la descentralización; la introducción de mecanismos y espacios de participación ciudadana; la creación y fortalecimiento de agencias de control fiscal, de lucha contra la corrupción y de protección de derechos; la proliferación de experiencias de presupuestos participativos; y legislaciones y esfuerzos gubernamentales y ciudadanos por la producción, publicación y uso de datos abiertos (Ramírez-Alujas 2014 y Gattoni 2016).

Diversos países de la región también han venido mostrando un rol protagónico en iniciativas internacionales por avanzar hacia una gobernanza abierta, como la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT), la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), la Carta Internacional por los Datos Abiertos (IODC) y la Alianza por las Contrataciones Abiertas (OCP), por mencionar algunos ejemplos.

Este artículo explora las acciones de 15 países de América Latina, que son miembros de la AGA, y que están realizando acciones de seguimiento al ejercicio de gasto, que los gobiernos hacen del dinero público y la información disponible a nivel internacional, para apoyar y analizar el avance hacia una gobernanza fiscal abierta.

En la primera sección del artículo, se analizan los compromisos relacionados con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en torno al flujo de los recursos públicos que los

países han definido como parte de sus planes de acción y las evaluaciones realizadas por el Mecanismo de Reporte Independiente de la AGA (IRM).

En la segunda sección, se plantea un marco de referencia para analizar el avance hacia una gobernanza fiscal abierta, y se indaga por la información existente sobre el tema en las principales evaluaciones internacionales sobre el tema.

Finalmente, se presentan a modo de conclusión, algunas reflexiones sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia una gobernanza fiscal abierta.

1. Seguimiento del dinero en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) fue creada en 2011 e integrada actualmente por 70 países, y se propone aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; apoyar la participación ciudadana; aplicar los más altos estándares de integridad profesional; y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas (AGA 2011). Para lograr estos objetivos, los gobiernos de los países miembros co-crean con organizaciones ciudadanas una serie de compromisos que se consignan en planes de acción, los cuales incluyen compromisos vigentes en periodos de 2 años. Su diseño e implementación, es evaluado por un Mecanismo de Reporte Independiente (IRM) que elabora reportes de avance y, recientemente, de reportes de finalización. Una vez que se ha cumplido un ciclo de dos años, gobiernos y ciudadanos lanzan un nuevo plan de acción.

Actualmente los países fundadores de la alianza (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos) se encuentran en el tercer ciclo de planes de acción, mientras que los demás países se encuentran en el primer o segundo ciclo dependiendo del año en el que se involucraron en la iniciativa.

América Latina es una región que viene jugando un rol protagónico en el marco de los esfuerzos por avanzar hacia una mayor apertura gubernamental. Ya son 15 países miembros de la AGA. En el encuentro regional para las Américas de la AGA, realizado en Montevideo en Junio de 2016, el Director de la AGA hizo un llamado a fortalecer la acción colectiva, para avanzar hacia un gobierno abierto, destacando que el mayor reto para la región es aumentar la ambición de los compromisos y el impacto de estos frente a grandes desafíos sociales como la corrupción, el crimen y violencia juvenil, las violaciones de derechos humanos y las fallas en la prestación de servicios (Pradhan 2016).

Investigaciones realizadas sobre la implementación del gobierno abierto en la región, señalan la importancia de mejorar la calidad de la formulación de compromisos y la medición del impacto logrado con la implementación de los mismos, y el desafío que implica el rezago en la implementación de compromisos. El 25% de los compromisos de los primeros planes de acción no se han cumplido, frente al avance en la

formulación de nuevos planes de acción en la región (Ramírez-Alujas y Dassen 2016).

Ramírez-Alujas y Dassen (2014, 2016) señalan seis problemas que están minando la iniciativa de gobiernos abiertos en la región latinoamericana:

Primero, la falta de conceptualización del gobierno abierto ha llevado a que haya poca homogeneidad en el modo en el que se aborda el tema en la región. Los segundos planes de acción, muestran esfuerzos por definir el concepto para su aplicación a nivel nacional.

Segundo, existe cierto enfoque que busca igualar el gobierno digital con el gobierno abierto, aunque recientemente se identifica un avance para comprender la tecnología y datos abiertos, solo cómo medio para avanzar hacia gobiernos más abiertos.

Tercero, la ausencia de compromisos redactados en términos más accesibles para los ciudadanos, con un avance en la formulación de los segundos planes.

Cuarto, el bajo nivel de ambición de los compromisos para ir más allá de compromisos enfocados en la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, destacando algunos compromisos adoptados en los segundos planes de acción que buscan impactos sustantivos en otros temas como políticas de género, en Colombia (AGA SF 2011), y un Estado abierto, en Costa Rica (Accesa 2015).

Quinto, la necesidad de mejorar los procesos de diálogo entre los ciudadanos y gobiernos y la evidencia reciente de mejoras en los procesos de co-creación.

Y finalmente, el sexto, apunta a la importancia de aumentar la inclusión de otros actores institucionales en los esfuerzos de gobierno abierto, incluyendo a gobiernos sub-nacionales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, destacando la importancia de compromisos por Parlamentos Abiertos (Opening Parliament 2012) y la inclusión de ciudades y entidades sub-nacionales Latinoamericanas como Buenos Aires, Jalisco, La Libertad y Sao Paulo, en el plan piloto sub-nacional y local de AGA.

El análisis que presenta este documento, se hace énfasis en el avance hacia una gobernanza fiscal abierta, entendida como la aplicación de los principios de gobierno abierto en relación al uso de los recursos públicos y el modo en el que estos son utilizados para alcanzar resultados de desarrollo, y los compromisos realizadas con este fin en el marco de la AGA. Para lograr el objetivo propuesto, se utilizan los datos de las evaluaciones realizadas por el IRM de los compromisos adoptados por los gobiernos, incluyendo las siguientes variables (IRM 2016) analizadas por este mecanismo:

Etiquetas: un conjunto de 43 etiquetas utilizados para identificar los temas que se relacionan con los compromisos, en este análisis se utilizan 10 de estas etiquetas para identificar compromisos relacionados con el uso de los recursos públicos (publicación declaración de bienes o ingresos de funcionarios, lucha contra la corrupción, auditorías y controles, apertura fiscal, presupuestos ciudadanos, presupuestos participativos, auditorías sociales, compras públicas, recursos naturales, y cooperación internacional)

Especificidad: que se refiere al nivel de claridad en la formulación del compromiso y si este es medible o no, esta variable va de baja, cuando se requiere interpretación del lector, a alta, cuando el compromiso provee hitos claros, medibles y verificables.

Valores de AGA: esta variable identifica si los compromisos se relacionan con el acceso a la información, la participación ciudadana, la integridad pública y la tecnología, un compromiso puede relacionarse con uno o más de estos valores.

Impacto potencial: este potencial va desde ninguno, cuando el compromiso mantiene o empeora la situación actual, a transformativo, cuando la implementación del compromiso puede transformar el modo tradicional en el que se implementan las políticas en un área específica.

Implementación: la evaluación a la mitad del ciclo sobre el nivel de instrumentación de los compromisos del plan de acción, esta variable considera opciones como retirado, cuando el compromiso fue sacado del plan de acción, hasta una implementación substancial o completa del compromiso al momento de la evaluación.

Compromisos estelares: son los compromisos que han cumplido los criterios para considerarse como los mejores, en términos de relevancia para valores AGA, especificidad, implementación y potencial impacto.

Es importante aclarar, que sólo se toman en cuenta en los cálculos realizados, los compromisos que hayan sido revisados por el IRM y que cuenten con datos para todas las categorías. Debido a lo anterior, no se incluyen compromisos en planes de acción que aún no han sido evaluados, como el caso del segundo plan de acción de Colombia, ni compromisos que no fueron evaluados o para los que no hay datos en todas las variables utilizadas, como en los casos del primer plan de acción de Brasil y México.

En el cuadro 1 se analiza el número de compromisos para América Latina, para los demás países miembros de la AGA y para cada país de la región que es miembro, identificando el total de compromisos, el porcentaje de estos que se relacionan con el uso de los recursos públicos y la proporción de estos que corresponde al primer y segundo plan de acción.

	Total Compromisos	% Compromisos Seguimiento del Dinero	% Compromisos Primer Plan de Acción		% Compromisos Segundo Plan de Acción	
			Total	Seguimiento del Dinero	Total	Seguimiento del Dinero
América Latina	545	26.24%	57.61%	24.20%	42.39%	29.00%
Demás Países AGA	1157	25.24%	63.27%	25.00%	35.09%	25.62%
Argentina	19	10.53%	100.00%	10.53%	NA	NA
Brasil	51	23.53%	NA	NA	100.00%	23.53%
Chile	31	16.13%	61.29%	21.05%	38.71%	8.33%
Colombia	28	25.00%	100.00%	25.00%	NA	NA
Costa Rica	23	17.39%	100.00%	17.39%	NA	NA
República Dominicana	35	31.43%	68.57%	33.33%	31.43%	27.27%
El Salvador	76	28.95%	73.68%	28.57%	26.32%	30.00%
Guatemala	62	43.55%	22.58%	35.71%	77.42%	45.83%
Honduras	46	43.48%	69.57%	46.88%	30.43%	35.71%
México	26	46.15%	NA	NA	100.00%	46.15%
Panamá	5	0.00%	100.00%	0.00%	NA	NA
Paraguay	24	16.67%	62.50%	13.33%	37.50%	22.22%
Perú	48	18.75%	100.00%	18.75%	NA	NA
Trinidad y Tobago	13	23.08%	100.00%	23.08%	NA	NA
Uruguay	58	8.62%	31.03%	5.56%	68.97%	10.00%

Cuadro 1.

Compromisos relacionados con el seguimiento del dinero en los diferentes planes de acción AGA

Fuente: elaboración propia.

Cómo se aprecia en el Cuadro 1, los compromisos relacionados con el seguimiento del dinero en el marco de la AGA, son cerca de un cuarto del total de compromisos tanto para América Latina como para los demás países AGA y la proporción se mantiene relativamente estable entre los primeros planes de acción y los segundos.

Esta proporción es similar para cinco países (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Trinidad y Tobago), mientras que en seis es menor (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) incluyendo a Panamá donde no se registra ningún compromiso, y en cuatro países es mayor (República Dominicana, Guatemala, Honduras y México). La proporción también se mantiene relativamente estable entre los compromisos del primer plan de acción y el segundo. Para El Salvador la tendencia se mantiene constante, mientras que otros países registran una menor proporción de compromisos en el tema como República Dominicana (6% menos), Chile y Honduras (Cerca de 10% menos) mientras que en cuatro países aumenta la proporción incluyendo a Uruguay (con 5% más), Guatemala, Honduras y Paraguay (los tres con cerca de 10% más).

Ahora bien ¿Cuál es el grado de ambición e implementación de los compromisos relacionados con el seguimiento del dinero público? ¿Varían estos niveles entre los compromisos del seguimiento del dinero público y los demás, o entre la región y el resto de los países?

En el Cuadro 2 se abordan estas dos preguntas analizando el porcentaje de compromisos que muestran un potencial transformador y aquellos compromisos que han sido completados o que contaron con un avance sustancial al momento de la evaluación de progreso realizada por el IRM.

	% Compromisos Ambición Transformativa		% Compromisos Implementación sustancial o completa	
	Total	Seguimiento del Dinero	Total	Seguimiento del Dinero
América Latina	15.23%	20.28%	49.17%	60.84%
Demás Países AGA	17.37%	19.86%	48.40%	54.79%
Argentina	10.53%	50.00%	63.16%	50.00%
Brasil	5.88%	8.33%	78.43%	91.67%
Chile	22.58%	40.00%	74.19%	60.00%
Colombia	42.86%	71.43%	42.86%	57.14%
Costa Rica	13.04%	50.00%	43.48%	75.00%
República Dominicana	28.57%	45.45%	45.71%	36.36%
El Salvador	13.16%	18.18%	28.95%	27.27%
Guatemala	6.45%	7.41%	51.61%	55.56%
Honduras	17.39%	15.00%	32.61%	40.00%
México	0.00%	0.00%	69.23%	66.67%
Paraguay	33.33%	50.00%	41.67%	25.00%
Perú	16.67%	11.11%	29.17%	22.22%
Trinidad y Tobago	7.69%	0.00%	15.38%	0.00%
Uruguay	12.07%	20.00%	72.41%	100.00%

Cuadro 2.

Ambición e implementación de compromisos relacionados con el seguimiento del dinero*

*No incluye a Panamá por no tener compromisos relacionados con el seguimiento del dinero. Fuente: elaboración propia con datos de las evaluaciones del IRM.

En términos generales, la región y los demás países de la AGA muestran una mayor ambición e implementación de compromisos relacionado con el seguimiento del dinero público, en comparación con los demás compromisos asumidos por países de América Latina. Esta diferencia es de 5% más, en términos de potencial impacto y 11 % más, en términos de implementación, siendo mayor que la diferencia a nivel de los demás países de la AGA (2% y 7% respectivamente). Al ver esta relación en los diferentes países no se identifica una tendencia clara.

Por un lado, Trinidad y Tobago no registra ni ambición, ni implementación en sus compromisos en el tema. México no registra compromisos con potencial de cambio, mientras que muestra un nivel de implementación similar entre este tipo de compromisos y los demás (en relación a la ambición e implementación de los compromisos AGA en México, ver Gerson y Nieto 2016 y Guercovich y Moses 2016). Por otro lado, cinco países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay) muestran un mayor nivel de ambición e implementación en los compromisos relacionados con el seguimiento del dinero, que en el conjunto total de compromisos. Mientras tanto el Salvador y Guatemala no muestran diferencias; Chile y Paraguay registran una mayor ambición en los compromisos relacionados con el seguimiento del dinero, aunque a su vez tienen una menor implementación de los mismos.

La relación de los compromisos del seguimiento de dinero en el marco de la AGA con los valores de gobierno abierto (ver Cuadro 3) muestra que tres cuartas partes de los compromisos se relacionan con la transparencia, mientras que sólo una tercera parte de los compromisos se asocian con la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la tecnología. Estas proporciones son similares en América Latina y en los demás países miembros de la AGA, aunque se identifica que América Latina tiene un 8% más de compromisos relacionados con la transparencia y un 6% más de compromisos relacionados con la tecnología. En relación a los

compromisos relacionados con el seguimiento del dinero, América Latina tiene un 8% de compromisos relacionados con la participación ciudadana y un 12% menos de compromisos relacionados con la rendición de cuentas que los demás países AGA.

	Acceso a la Información		Participación Ciudadana		Rendición de Cuentas		Tecnología	
	Total	Seguimiento del Dinero Público	Total	Seguimiento del Dinero Público	Total	Seguimiento del Dinero Público	Total	Seguimiento del Dinero Público
América Latina	69.36%	72.73%	35.23%	33.57%	31.19%	39.86%	37.80%	32.17%
Demás Países AGA	60.76%	69.86%	30.94%	25.68%	33.19%	52.74%	31.55%	30.14%

Cuadro 3.
Compromisos de seguimiento del dinero y valores AGA

Fuente: Elaboración propia

La AGA utiliza la idea de compromisos estelares, para identificar aquellos compromisos que se encuentran claramente relacionados con los valores AGA y tienen las más altas evaluaciones en términos de ambición, implementación y claridad. Es importante notar que, del total de compromisos analizados en este trabajo, cerca de un 12% son estelares, lo que es similar para América Latina y los demás países AGA y para los compromisos relacionados con el uso del dinero.

Los 18 compromisos estelares relacionados con el seguimiento del dinero público, identificados en América Latina (Ver Cuadro 4) se relacionan en su mayoría con la apertura fiscal (9), los recursos naturales (6) y las Compras públicas (3).

País	Título del Compromiso Estelar
Argentina	Creación de un portal de Datos Públicos
Brasil	Desarrollo de una metodología para la participación social en el monitoreo del plan plurianual y la formulación del presupuesto público federal
Brasil	Apertura de datos sobre la ejecución del presupuesto de la unión y las compras públicas
Brasil	Auditorías participativas sobre la construcción de las ciudades anfitrionas para el mundial de la FIFA 2014
Brasil	Desarrollo de herramientas para aumentar la transparencia y fortalecer la gobernanza de la tierra
Chile	Fortalecimiento de la democracia ambiental
Costa Rica	Implementar la Apertura del Presupuesto Público
Costa Rica	Desarrollar un Índice de Transparencia de las instituciones públicas de Costa Rica
República Dominicana	Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Guatemala	Asegurar que los recursos destinados a la atención de daños provocados por desastres naturales se utilicen con estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Guatemala	Transparentar las exenciones y exoneraciones de impuestos
Honduras	Empoderamiento ciudadano sobre el presupuesto.
México	Fondo emprendedor abierto y participativo:
México	Protección participativa del medio ambiente:
Uruguay	Datos Abiertos para el análisis de políticas públicas
Uruguay	Catastro Abierto
Uruguay	Observatorio de Compras públicas
Uruguay	Registro único de proveedores del Estado

Cuadro 4.

Compromisos estelares relacionados con el seguimiento del dinero en América Latina

Fuente: elaboración propia con planes de acción como insumo y evaluaciones del IRM.

2. Herramientas e iniciativas internacionales para avanzar hacia una gobernanza fiscal abierta

Recientemente se ha multiplicado el número de iniciativas y esfuerzos internacionales para promover el avance hacia una gobernanza fiscal abierta. Estas iniciativas para mejorar la gestión pública y fortalecer la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en torno al uso de los recursos públicos, se han enfocado en procesos particulares de la gestión pública, o en temas específicos relacionados con el tipo de ingresos, los sectores de gobierno o la integridad y lucha contra la corrupción.

Esta tendencia ha sido útil para facilitar la profundización en el conocimiento y la capacidad de incidir y movilizar agendas por la promoción de reformas particulares o cambios en las prácticas públicas. También ha permitido influir en el diseño y puesta en marcha de diferentes indicadores, estándares de datos abiertos, comunidades de práctica alianzas multi-actores. Algunos temas en los que se ha dado a conocer este avance, se presentan de modo ilustrativo en el siguiente cuadro, anotando a organizaciones que están liderando en cada tema.

Mejoras en:		Organizaciones e Iniciativas Internacionales
Procesos Públicos	Presupuestos públicos	International Budget Partnership Open Budgets
	Contrataciones y Compras Públicas	Alianza por las contrataciones abiertas Red interamericana de compras gubernamentales
	Gasto Público	Open Spending Boost Initiative del Banco Mundial
	Sistemas de Administración Financiera	Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal Programa PEFA
Fuentes de ingresos estatales	Cooperación Internacional	International Aid Transparency Initiative Publish What You Fund
	Recursos Naturales no Renovables	Natural Resource Governance Institute Publish What you Pay
Sector de gobierno	Agua	Water Integrity Network Water Governance Facility
	Construcción	Construction Sector Transparency Initiative
Integridad y Lucha contra la corrupción	Flujos internacionales ilícitos	Partnership on Illicit Finance Global Financial Integrity Tax Justice Network
	Registros de propiedad beneficiaria sobre empresas	Global Witness Opencorporates
	Lucha contra la corrupción	Transparencia Internacional Programa Anticorrupción de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) para América Latina

Cuadro 5.

Organizaciones e iniciativas internacionales trabajando por promover mejoras en torno al uso de los recursos públicos

Fuente: elaboración propia.

Esta tendencia ha tenido como consecuencia, que las diferentes comunidades y esfuerzos han evolucionado de un modo fragmentado, dificultando la identificación de oportunidades potenciales de cooperación y la capacidad de esta amplia comunidad para trabajar en la atención de grandes desafíos sociales, en el camino hacia un mayor desarrollo en nuestras sociedades.

Una alternativa para afrontar esta situación es abordar el tema desde la narrativa del flujo de los recursos públicos y el modo en el que estos recursos son usados por ciudadanos y gobiernos, para generar soluciones a problemas particulares priorizados, que obstaculizan mejorar la calidad de vida.

Esta perspectiva, no implica una disrupción con los importantes avances alcanzados en torno al gobierno abierto y el uso de los recursos públicos. Por el contrario, plantea una ruta de análisis que facilita la generación de nuevas preguntas y abrir oportunidades para la co-creación de soluciones que puedan potenciar el efecto de distintas iniciativas.

En esta narrativa es importante partir de tres ideas:

- a) El seguimiento del flujo de los recursos públicos tiene mayor sentido cuando se facilita la comprensión de problemas y la innovación en torno a las formas para solucionarlos. Es decir, iniciar el análisis a partir de un problema particular.

Partir de las necesidades y las prioridades ciudadanas. Dificilmente podemos innovar en el uso de los recursos públicos para generar soluciones a problemas prioritarios para los ciudadanos, si no entendemos cómo los problemas afectan a grupos ciudadanos en contextos específicos.

Comprender cómo los problemas afectan a los ciudadanos en contextos particulares, se abre la posibilidad de entender los resultados que tienen un mayor impacto en la resolución de los problemas y en qué medida los procesos, fuentes de financiamiento y acciones en distintos sectores de gobierno, pueden facilitar u obstaculizar la obtención de dichos resultados.

Para realizar un seguimiento del dinero público, se utiliza un marco de análisis basado en cuatro elementos, que se denominarán capas. Las capas, facilitan formar una imagen completa del sistema, para identificar obstáculos en la obtención de buenos resultados de desarrollo y explorar la forma en la que diferentes procesos y temas, pueden conectarse para abordarlos. A continuación se presentan estas cuatro capas:

- Las políticas y regulaciones. Hacen referencia a las leyes, regulaciones y compromisos, nacionales o internacionales, asumidos por los gobiernos en torno al uso de los recursos públicos, así como la implementación de los mismos;

Los datos. Se refieren a la información que se pone a disposición de la ciudadanía, los formatos y la calidad con los que esta información se publica y los esfuerzos por utilizar y promover la innovación en el uso de esta información;

Las oportunidades para incidir en las decisiones públicas incluyendo los procesos de toma de decisión relevantes en el tema, la manera en la que estos procesos funcionan y los actores involucrados; y

Las capacidades. A nivel de la ciudadanía y el gobierno, para producir y hacer uso de esta la información para identificar y comprender problemas públicos, evaluar alternativas de solución y hacer seguimiento a la implementación de las soluciones y la obtención de resultados.

Cada una de estas capas se utiliza para abordar la gobernanza fiscal abierta, y lograr un análisis complementario de la implementación de los principios de transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas y su valor práctico para transformar las relaciones entre ciudadanía y gobierno.

¿Con qué información se cuenta a nivel regional sobre estas capas?

Es posible identificar 12 evaluaciones aplicadas a nivel regional que nos brindan información sobre el avance de la región hacia una gobernanza fiscal abierta.

En el cuadro 6 se presentan estas evaluaciones y en el cuadro 7, se presenta la cobertura de estas evaluaciones en los 15 países de la región que son miembros de la AGA. Posteriormente se aborda de modo general

algunos de los principales resultados de estas evaluaciones para analizar el seguimiento del dinero público.

Evaluación	Descripción
World Governance Indicators (WGI)	Esta agregación de indicadores desarrollada por el Banco Mundial (BM) se basa en percepciones de la gobernanza desde un variado número de fuentes para medir seis dimensiones: voz y rendición de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia; efectividad de los gobiernos; calidad de regulación; imperio de la ley; y control de la corrupción (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2010 y BM 2015).
Open Budget Survey (OBS)	Esta evaluación producida por International Budget Partnership (IBP) aborda el nivel de transparencia en los presupuestos incluyendo la disponibilidad y nivel de profundidad de documentos presupuestarios clave, oportunidades para la participación y el nivel de vigilancia sobre el presupuesto realizado por el legislativo y las entidades fiscalizadoras (IBP 2015).
Open Data Barometer (ODB)	Esta evaluación producida por la World Wide Web Foundation (WWWF) analiza la preparación para iniciativas de datos abiertos, la implementación de los programas de datos abiertos y el impacto de los datos abiertos en negocios, política y sociedad civil (WWWF 2015 y 2015a).
Open Data Index (ODI)	Esta evaluación liderada por Open Knowledge International (OKI) evalúa el estado de los datos abiertos por los gobiernos en estadísticas nacionales, presupuesto, legislación, licitaciones públicas, resultados electorales, mapas nacionales, pronóstico del clima, emisión de polución, registro de compañías, datos de ubicación geográfica, calidad del agua, propiedad de la tierra, gasto público (OKI 2015 y 2015a).
Resource Governance Index (RGI)	Esta evaluación producida por el Natural Resource Governance Institute (NRGI) aborda la calidad de la gobernanza en los sectores de petróleo, gas y minería con énfasis en el contexto legal e institucional, las prácticas de reporte, las salvaguardias y controles de calidad y características habilitantes del contexto (Revenue Watch Institute, 2013).
Open Government Index (OGI)	Esta evaluación realizada por el World Justice Project (WJP) mide la apertura gubernamental a partir de las percepciones y experiencias del público en general sobre la publicidad de las leyes y datos del gobierno, el derecho de acceso a la información, la participación cívica y mecanismos de quejas (WJP 2015).
Global Right to Information Rating (GRIR)	Esta evaluación realizada por Access Info Europe (AIE) y el Center for Law and Democracy (CLD) aborda la fortaleza de los marcos legales para el derecho de acceso a la información tomando en cuenta las siete variables: derecho de acceso; alcance; procedimientos de solicitud; excepciones y negaciones; apelaciones; sanciones y protecciones; y medidas de promoción (AIE y CLD 5F).
Índice de gestión para resultados en el desarrollo (IGRD)	Esta evaluación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aborda las capacidades institucionales que los países tienen para implementar una gestión pública efectiva, eficiente y transparente. Este análisis se realiza a partir de la revisión de cinco pilares del ciclo de la gestión pública: planificación, presupuesto, gestión financiera pública, gestión de programas y proyectos, seguimiento y evaluación. (Kaufmann, Sanginés y García 2015).
Illicit Financial Flows (IFF)	Estos estimados publicados por Global Financial Integrity (GFI) presenta información sobre flujos internacionales de dinero que son obtenidos, transferidos o utilizados ilícitamente (GFI 2015).
Benchmarking Public Procurement (BPP)	Esta evaluación realizada por el Banco Mundial (BM) mide la aplicación de buenas prácticas a lo largo de las fases del ciclo de compras públicas. (BM 2016).
Financial Secrecy Index (FSI)	Esta clasificación realizada por la Tax Justice Network (TJN) clasifica a los países de acuerdo a su secretismo y el nivel de actividades financieras en paraísos fiscales (TJN 2015).
Campaign Finance Indicators (CFI)	Esta evaluación realizada por Global Integrity (GI 2015), Sunlight Foundation (SF) y Electoral Integrity Project (EIP) aborda la transparencia y efectividad de los regímenes de financiación de campañas políticas al analizar la legislación que se encuentra en vigor y la implementación de esta legislación. (GI, SF y EIP 2015).
PEFA	Esta evaluación realizada por la alianza PEFA a solicitud de los países evalúa el estado de la gestión de las finanzas públicas cubriendo: la confiabilidad del presupuesto, la transparencia de las finanzas públicas, la gestión de activos y pasivos; la estrategia fiscal y presupuestación basadas en políticas; la previsibilidad de la ejecución presupuestaria; la contabilidad y presentación de informes; y el escrutinio y auditoría externos (PEFA 2016). A diferencia de las otras evaluaciones las realizadas usando el marco PEFA sólo son publicadas con la aprobación de cada país (PEFA 2016a).

Cuadro 6.

Evaluaciones relacionadas con el uso de los recursos públicos que cubren la región

Fuente: elaboración propia

País	Evaluación disponible más reciente												
	WGI	OBS	ODB	ODI	RGI	OGI	GRIR**	IGRD	IFF	BPP	CFI	IFS	PEFA
Argentina	2014	2015	2015	2015	No	2015	2004	2013	2013	2016	2014	No	No*
Brasil	2014	2015	2015	2015	2013	2015	2011	2013	2013	2016	2014	2015	2009
Chile	2014	2015	2015	2015	2013	2015	2008	2013	2013	2016	2014	2015	No
Colombia	2014	2015	2015	2015	2013	2015	1985	2013	2013	2016	2014	No	2009*
Costa Rica	2014	2015	2015	2015	No	2015	No	2013	2013	2016	2014	2015	2010*
República Dominicana	2014	2015	No	2015	No	2015	2004	2013	2013	2016	No	No	2012*
El Salvador	2014	2015	No	2015	No	2015	2011	2013	2013	2016	No	No	2013
Guatemala	2014	2015	No	2015	No	2015	2008	2013	2013	2016	No	2015	2013
Honduras	2014	2015	No	No	No	2015	2006	2013	2013	2016	No	No	2013
México	2014	2015	2015	2015	2013	2015	2002	2013	2013	2016	2014	2015	No
Panamá	2014	No	No	2015	No	2015	2002	2013	2013	2016	2014	2015	2013
Paraguay	2014	No	2015	2015	No	No	2014	2013	2013	2016	2014	2015	2013*
Perú	2014	2015	2015	No	2013	2015	2003	2013	2013	2016	2014	No	2009*
Trinidad y Tobago	2014	2015	No	2015	2013	No	1999	2013	2013	2016	2014	No	2008
Uruguay	2014	No	2015	2015	No	2015	2008	2013	2013	2016	2014	2015	2012*

Cuadro 7.

Países cubiertos por las diferentes evaluaciones

* Existen evaluaciones adicionales a nivel sub-nacional o que son más recientes, pero aún no se han finalizado ** Hay algunas leyes recientes que no han sido revisadas por esta evaluación como la de México y Colombia Fuente: elaboración propia

2.1. Políticas y regulación

La capa de políticas y regulación destaca por los compromisos relacionados con el uso de los recursos públicos, de acuerdo a las diez evaluaciones revisadas en esta investigación. En cinco, se observa que profundizan en el uso de los recursos naturales no renovables (RGI), el acceso a la información (GRIR), el secretismo financiero (FSI), la

financiación de campañas políticas (CFI) y el ciclo de las compras públicas (BPP).

Es interesante destacar el modo en el que dos de estas evaluaciones no sólo evalúan el marco legal en los temas identificados, sino el modo en el que este es implementado (RGI, CFI). El BPP incluye algunos indicadores que muestran el efecto que el cumplimiento, o incumplimiento, de la legislación en el proceso de contratación pública.

Tres evaluaciones incluyen temas particulares relacionados con la regulación del uso de los recursos públicos:

1. el PEFA, toma en consideración diversos elementos del marco legal y las políticas para analizar el sistema de administración financiera entre los que encuentra el calendario presupuestal y las normas contables;
el IGRD incluye dentro de los indicadores que utiliza para evaluar la gestión de resultados la revisión de la existencia y el contenido de leyes y políticas relacionadas con la planificación, el presupuesto, la gestión financiera pública, la gestión de programas y proyectos, el seguimiento y evaluación; y,
el OBS incluye indicadores que dan cuenta del marco legal en términos de las situaciones en las que se debe consultar al Congreso para realizar cambios al presupuesto, hacer uso de ingresos excedentes o contingencias, de elementos relacionados con la independencia de la auditoría superior y sobre la obligación del ejecutivo de consultar a la ciudadanía sobre la formulación e implementación del presupuesto.

Adicionalmente, dos evaluaciones utilizan la percepción de los ciudadanos como proxy de la gobernanza. Particularmente los WGI lo hacen para analizar, entre otros, la efectividad de los gobiernos, el imperio de la ley y el control de la corrupción, mientras que el OGI lo hace para analizar el acceso a la información, la participación ciudadana y los mecanismos para elevar quejas ante el gobierno.

En la capa de políticas y regulaciones, es importante notar que podemos obtener resultados muy útiles sobre diferentes componentes de la gobernanza fiscal abierta, cómo los sistemas de administración fiscal o de compras públicas, o temas clave para la gestión de los recursos públicos, como la gobernanza de los recursos naturales no renovables. Pero las evaluaciones existentes brindan poca información sobre la conexión entre estos elementos y cómo estas conexiones afectan, o facilitan, el logro de objetivos de desarrollo. En este sentido un desafío importante para avanzar hacia la gobernanza fiscal abierta es poder desarrollar evaluaciones complementarias que permitan una mejor comprensión del uso de los recursos públicos y los desafíos particulares que enfrentan los países de la región.

2.2. Datos

En la segunda capa, ocho de las evaluaciones revisadas abordan la publicación de información o datos sobre el uso de los recursos disponibles. De estas evaluaciones, tres usan la publicación de información como elemento fundamental de su diseño. Por un lado, el OBS indaga por la publicación de 8 documentos sobre el proceso presupuestal (documento preliminar, propuesta de presupuesto del ejecutivo, presupuesto aprobado, presupuesto ciudadano, informes entregados durante el año, revisión de mitad de año, informe de fin de año, e informe de auditoría) y el contenido de dichos documentos.

El ODB y el ODI, se enfocan en la publicación de diferente información, analizando si está disponible y publicada en formatos abiertos. La información cubierta por estas dos evaluaciones incluye: presupuesto, gasto público, legislación, licitaciones públicas, registro de compañías, calidad del agua y desempeño en salud y educación. Es importante destacar, que en estas últimas evaluaciones los vínculos a las fuentes de datos identificadas en cada país como disponibles o en formatos abiertos, se encuentran relacionados como parte de los resultados de las investigaciones (OKI 2015a, WWF 2015a).

Con estas tres evaluaciones podemos identificar de modo general un panorama de la disponibilidad de información sobre la transparencia en temas presupuestales (poca, alguna, suficiente), así como sobre la disponibilidad y formatos de bases de datos relacionadas con el uso de los recursos públicos y en menor medida con algunos resultados de desarrollo cómo el desempeño en salud y educación (ver Cuadro 8).

País	OBS	Presupuesto	Gasto	Contratos	Registro Empresas	Salud	Educación	Crimen
Argentina	Alguna	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No existe	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina
Brazil	Suficiente	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
Chile	Alguna	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
Colombia	Alguna	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
Costa Rica	Alguna	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
República Dominicana	Alguna	Pública	No pública	Leible por maquina	Pública	Sin Información	Sin Información	Sin Información
El Salvador	Alguna	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No pública	Sin Información	Sin Información	Sin Información
Guatemala	Alguna	Pública	No pública	Pública	No pública	Sin Información	Sin Información	Sin Información
Honduras	Alguna	Sin Información	Sin Información	Sin Información	Sin Información	Sin Información	Sin Información	Sin Información
México	Suficiente	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
Panamá	Sin Información	Pública	No pública	Pública	No pública	Sin Información	Sin Información	Sin Información
Paraguay	Sin Información	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No pública	no pública	no pública	No existe
Perú	Suficiente	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina
Trinidad y Tobago	Poca	Pública	No existe	Pública	No pública	Sin Información	Sin Información	Sin Información
Uruguay	Sin Información	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	No pública	Leible por maquina	Leible por maquina	Leible por maquina

Cuadro 8.

Nivel de transparencia presupuestal y disponibilidad y formatos de información relacionada con el seguimiento del dinero

Fuente: elaboración propia.

Otras tres evaluaciones, incluyen la publicación de información en temas particulares como criterios para el análisis:

- a) el RGI incluye la publicación de contratos y las prácticas de reporte en el sector de los recursos naturales no renovables;
 - el PEFA cuenta con un componente específico de transparencia en la gestión financiera e incluye la publicación y contenido de otros documentos como elementos de análisis; y,
 - los CFI incluyen información sobre la obligatoriedad de publicar información sobre la financiación de campañas, incluyendo los recursos públicos, y el modo en que se realiza en la práctica.

Adicionalmente, el OGI aborda la percepción de los ciudadanos sobre la visibilidad de los datos de gobierno como parte de un componente de la evaluación y el IFF utiliza la información sobre los flujos financieros ilegales como principal elemento de la evaluación del tema.

Una experiencia reciente relacionada con esta capa, es el pilotaje de una metodología para evaluar los portales de transparencia presupuestal (Romero, de la Mora y Ruiz 2016). Esta evaluación, analizó 4 dimensiones de la publicación de información presupuestal en línea por parte de los gobiernos:

el alcance, cubriendo la cantidad de información publicada y su exhaustividad; 2) la accesibilidad, vista como el nivel en el que los gobiernos facilitan el acceso y si la información es comprensible incluyendo la disponibilidad de herramientas de análisis, los formatos usados y si se proveen guías; 3) la confiabilidad de la información a través de la aplicación de prácticas claras de publicación (como fechas de publicación y actualización) de la información; y 4) la existencia de mecanismos de retroalimentación.

Cabe destacar los avances en términos del conocimiento sobre la disponibilidad de la información sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, es importante explorar también la accesibilidad y la calidad de esta información. Este reto es imperativo para poder informar los procesos de apertura de datos y transparencia que se encuentran en marcha e incrementar la posibilidad de transformar estos avances en un mayor uso de la información, por la ciudadanía y los gobiernos, para la toma de decisiones públicas.

Otro desafío relevante, es aumentar la publicación de información relacionada con los resultados de desarrollo, cómo la disminución de la pobreza y la mejora en la calidad de la educación, y poder construir herramientas innovadoras que permitan conectarlas con la información relativa al uso de los recursos públicos.

2.3. Oportunidades para incidir en las decisiones públicas

La tercera capa es la menos cubierta por las evaluaciones analizadas en este trabajo. Sólo tres evaluaciones incluyen elementos relacionados con las oportunidades para incidir en las decisiones relacionadas con el uso de los recursos públicos. El OBS incluye un eje que busca analizar la participación ciudadana en el ciclo presupuestal. En este eje se incluyen indicadores que cubren: a) las oportunidades de participación ofrecidas por el ejecutivo en la preparación e implementación del presupuesto; b) las oportunidades para formar parte de los debates y audiencias públicas desarrolladas por el legislativo para la aprobación y vigilancia del presupuesto; y, c) los mecanismos puestos a disposición de los ciudadanos para que se involucren en la definición del plan de auditoría, la realización de las auditorías y la divulgación de los resultados de las mismas.

El OGI indaga por la percepción de los ciudadanos sobre la existencia y efectividad de las oportunidades para participar y de los espacios o mecanismos para la presentación de quejas sobre la prestación de servicios públicos y el desempeño de los funcionarios públicos. En menor medida, El IGRD aborda las oportunidades de participación al evaluar el carácter participativo de los procesos de planeación.

En este tema es importante destacar los principios de participación pública en la política fiscal lanzados por la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT 2016). Luego de un amplio proceso de deliberación con representantes de gobiernos, agencias multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, se acordó que estos principios buscan

...garantizar que las autoridades oficiales fomentan y facilitan la participación abierta, responsable y constructiva de los actores no estatales, las organizaciones

de la sociedad civil, las organizaciones comerciales, los ciudadanos, los individuos y al público en general en la política fiscal del gobierno y en la elaboración del presupuesto (GIFT 2015, P. 4).

Estos principios deben ser una guía para funcionarios públicos y una herramienta para que la sociedad civil, pueda exigir espacios para una participación significativa en torno al uso de los recursos públicos. Llevar estas ideas a la práctica, en los diferentes países y contextos, es uno de los grandes desafíos para avanzar hacia una gobernanza fiscal abierta.

2.4. Capacidades

La evaluación de las capacidades para la producción, publicación y uso de la información sobre el uso de los recursos públicos se enfoca en las agencias públicas. Las evaluaciones que brindan información sobre esta capa son tres: 1) el PEFA, que brinda un análisis de problemas que enfrentan los países para fortalecer sus sistemas de administración fiscal y cuenta con un importante número de evaluaciones tanto a nivel nacional como subnacional; 2) el ODB que evalúa las capacidades de los gobiernos para poner en marcha e implementar políticas y programas de datos abiertos; y 3) el IGRD, el cual aborda el ciclo de la gestión pública brindando elementos importantes para identificar problemas relacionados con la producción y uso de información para la planeación basada en resultados en los diferentes países de la región.

Un interesante ejemplo del uso de la información del PEFA para el análisis de las capacidades institucionales, es realizado por Santiso (2015). Para argumentar su exploración sobre las fallas de la rendición de cuentas horizontal en temas presupuestales y la importancia de fortalecer los vínculos entre agencias fiscalizadoras y parlamentos, el autor utiliza los datos del PEFA para explicar cómo la debilidad de los Parlamentos en América Latina, no está en la existencia de poderes formales para dar seguimiento al presupuesto, sino en la debilidad de estas instituciones para ponerlos en práctica y asegurar un ambiente favorable para la auditoría externa y la independencia de la agencia auditora.

El seguimiento de los hallazgos de los resultados de las auditorías; la revisión y aprobación de los informes de cierre presupuestal; y una adecuada evaluación de las propuestas de presupuesto presentadas por el ejecutivo (Santiso 2015), son temas abordados por la OBS en su componente sobre rendición de cuentas horizontal, en los cuales, incorpora indicadores sobre la publicación de informes de auditoría, así como la capacidad del legislativo para hacer seguimiento al presupuesto y cumplir con la aprobación, revisión y exigencia de rendición de cuentas sobre el mismo.

En esta capa, se identifica el desafío de avanzar en la evaluación de capacidades de la sociedad civil y profundizar en la integración de la agenda de gobierno abierto en referencia al uso de los recursos públicos.

Las evaluaciones identificadas abordan, tanto las capacidades para producir, publicar y usar información, como la capacidad de las entidades encargadas de exigir rendición de cuentas sobre temas presupuestales.

Pero no se encuentran evaluaciones que aborden la capacidad de los gobiernos para brindar oportunidades significativas de participación ciudadana y sostener una interlocución constante con la ciudadanía.

Asimismo, no se encuentran herramientas para el análisis de las capacidades de la sociedad civil ni una revisión de los esfuerzos institucionales por avanzar hacia su fortalecimiento. Algunas iniciativas importantes para avanzar son el mapa de impacto sobre el uso de datos abiertos, el cual viene identificando experiencias en el uso de datos abiertos, e identifica 93 experiencias de uso de datos financieros y de funcionamiento del gobierno en la región (Center for Open Data Enterprise 2016).

Otros esfuerzos importantes son los desarrollados por la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA 2016) y la Escuela de Datos (2016) realizando investigación y procesos de fortalecimiento de las capacidades de organizaciones ciudadanas, para el uso de datos abiertos, la incidencia en políticas públicas, entre otros.

Conclusión

Para avanzar hacia la gobernanza fiscal abierta, se requiere continuar evaluando acciones que faciliten una mejor comprensión de la aplicación y destino de los recursos públicos. Para seguir la trayectoria del dinero público, es clave que los países de la región aumenten la publicación de información sistematizada sobre los resultados obtenidos en materia de desarrollo social y otras políticas, y su asociación con el uso de los recursos públicos. Poder construir herramientas innovadoras que permitan conectar esta información pública fiscal con la distribución y uso de los recursos públicos, es un gran reto en la Gobernanza Fiscal Abierta.

Esta investigación revisó las acciones desarrolladas por países Latinoamericanos miembros de la AGA, en materia una gobernanza fiscal abierta, así como las diferentes evaluaciones internacionales para identificar el estado de conocimiento sobre el tema que abordó el presente artículo, a nivel de la región latinoamericana.

Para concluir, se establecen tres reflexiones que permitan fomentar en el futuro, la colaboración entre diferentes iniciativas y esfuerzos relacionados con el uso de los recursos públicos y aprovechar las oportunidades que ofrece la AGA para fortalecer la acción colectiva:

1. La importancia de aprovechar los avances en términos de transparencia para avanzar en la apertura de información útil para la participación ciudadana y de impacto directo en mejorar la rendición de cuentas.
El reto de aumentar el conocimiento sobre las capacidades necesarias de y en la sociedad civil y de los gobiernos, para avanzar hacia una gobernanza abierta, y lograr un uso estratégico de las oportunidades que esta conlleva.

La necesidad de aprovechar los avances alcanzados con el uso de los recursos públicos, para movilizar una agenda enfocada en la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos y obstaculizan el logro de resultados de desarrollo.

Comprender que el gobierno abierto es una vía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, representa un reto de enorme complejidad, puesto que los recursos públicos fiscales son un indicador relevante a observar. Junto con las evaluaciones revisadas, se deben establecer métodos confiables para seguir la ruta del dinero público, en contextos institucionales transparentes y participativos.

Referencias

- Access Info Europe y Center for Law and Democracy. 2016. Country data. <http://www.rti-rating.org/country-data/> Accesa. 2015. Estado Abierto. <http://accesa.org/2015/11/26/celebramos-la-declaratoria-por-la-construccion-de-un-estado-abierto/>. (10 de agosto de 2016).
- Alianza para el Gobierno Abierto. 2011. Declaración de gobierno abierto. <http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/declaracion-de-gobierno-abierto/> (10 de agosto de 2016).
- Alianza para el Gobierno Abierto. 2016. 2011 Colombia. <http://www.opengovpartnership.org/country/colombia> (10 de agosto de 2016).
- Banco Mundial. 2015. The worldwide governance indicators (WGI) project. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>. (10 de agosto de 2016).
- Banco Mundial. 2016. Benchmarking public procurement 2016: assessing public procurement systems in 77 economies. <http://bpp.worldbank.org/~media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement-2016.pdf?la=en>. (10 de agosto de 2016).
- Center for Open Data Enterprise. 2016. Open data impact map. <http://www.opendataenterprise.org/map/viz/index.html>. (10 de agosto de 2016).
- Escuela de datos. 2016. Escuela de datos. <http://es.schoolofdata.org/> (10 de agosto de 2016).
- Freedom House. 2016. The battle for the dominant message. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016_Report_Final_04232016.pdf (10 de agosto de 2016).
- Gattoni, Soledad. 2016. La apertura estatal como agenda global: apuntes para el debate sobre la institucionalización de la participación y la transparencia en América Latina. *Iberoamericana*, 16 (62): 187-192.
- Gerson, Pedro y Fernando Nieto. 2016. Opening government? The case of Mexico in the open government partnership. <http://www.globalintegrity.org/wp-content/uploads/2016/06/Mexico-final.pdf> (10 de agosto de 2016).
- Global Financial Integrity. 2015. Illicit financial flows from developing countries 2004-2013. <http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/> (10 de agosto de 2016).

- Global Initiative for Fiscal Transparency. 2016. Principios de gift sobre la participación pública en la política fiscal. <http://www.fiscaltransparency.net/es/principiosgift/> (10 de agosto de 2016).
- Global Integrity, Sunlight Foundation y Electoral Integrity Project. 2015. Money, pPolitics and transparency. <http://moneypoliticstransparency.org/> (10 de agosto de 2016).
- Guerzocich, Florencia y Michael Moses. 2016. Learning to open government: findings and reflections on how the open government partnership is playing out, in practice, in five countries. <http://www.globalintegrity.org/wp-content/uploads/2016/06/Learning-to-Open-Government-full.pdf>. (10 de agosto de 2016).
- Human Rights Watch. 2013. Mexico: crisis of enforced disappearances. <https://www.hrw.org/news/2013/02/20/mexico-crisis-enforced-disappearances>. (10 de agosto de 2016).
- Independent Reporting Mechanism. 2016. Iniciativa latinoamericana por los datos abiertos. <http://idatosabiertos.org/>. (10 de agosto de 2016).
- International Budget Partnership. 2015. Encuesta de presupuesto abierto 2015. <http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Spanish.pdf> (10 de agosto de 2016).
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. 2010. The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues. Policy Research Working Paper Banco Mundial, 5430.
- Kaufmann, Jorge, Mario Sanginés y Mauricio Garcia (eds). 2015. Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Open Knowledge International. 2015. Open data index 2015: civil society audit of the state of open data. <http://index.okfn.org/about/> (10 de agosto de 2016).
- Open Knowledge International. 2015. Download. <http://index.okfn.org/download/>. (10 de agosto de 2016).
- Petrie, Murray y Juan Guerrero. 2015. Fiscal transparency in open government partnership countries, and the implementation of OGP commitments: An analysis. <http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20151028136.pdf> (10 de agosto de 2016)
- Pradhan, Sanjay. 2016. From mechanism to movement: an OGP call to collective action. <http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/06/02/mechanism-movement-ogp-call-collective-action> (10 de agosto de 2016)
- Ramírez-Alujas, Álvaro y Nicolas Dassen. 2014. Vientos de cambio: El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ramírez-Alujas, Álvaro y Nicolas Dassen. 2016. Vientos de cambio II: Avances y desafíos de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Revenue Watch Institute. 2013. Índice de la gobernanza de los recursos naturales 2013: una evaluación de la transparencia y rendición de cuentas en los sectores petrolero, gasífero y minero. Washington: Revenue Watch Institute.

- Santiso, Carlos. 2015. Why budget accountability fails? The elusive links between parliaments and audit agencies in the oversight of the budget. *Brazilian Journal of Political Economy*, 35 (3): 601-621. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-31572015v35n03a12>
- Tax Justice Network. 2015. Financial secrecy index. <http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi>. (10 de agosto de 2016).
- World Justice Project. 2015. Open government index: 2015 report. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/ogi_2015.pdf (10 de agosto de 2016).
- World Wide Web Foundation. 2015. Open data barometer global report third edition. <http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf>. (10 de agosto de 2016).
- World Wide Web Foundation. 2015a. Rankings and data. http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en. (10 de agosto de 2016).

Notas de autor

- [1] Grado: Doctor.
Especialización: Política pública.
- [2] Grado: Doctor
Especialización: Política pública.